Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

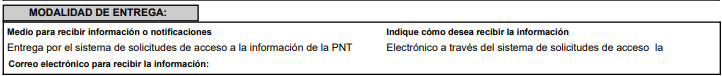
**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **05369/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXXX XXXXX XX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00671/FGJ/IP/2024,** por parte de la **Fiscalía General de Justicia del Estado de México,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **diez de julio de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, vinculada al Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“¿Cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía de esta entidad, en el periodo de 2000 a 2010? ¿Cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, en el periodo de 2000 a 2010? ¿Cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, en el periodo de 2000 a 2010? Se solicita desglosar por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (si es el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial. ¿Cuántas averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, por hechos ocurridos en 2005 y 2006? Se solicita desglosar por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (si es el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** Electrónico, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT, que, para efectos del presente asunto, se entenderá a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, SAIMEX; asimismo, señaló el referido sistema como medio para recibir información o notificaciones, como se advierte a continuación:



**2. Respuesta.** El **catorce de agosto de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…SE ADJUNTA RESPUESTA...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Oficio número 02453/MAIP/FGJ/2024, del catorce de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Titular de la Unidad de Transparencia, en atención a la solicitud, manifestó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el 07 de julio de 2017, se creó dicha Fiscalía, conforme a lo señalado en el Acuerdo 10/2017, y el 10 de julio del mismo año inició operaciones, motivo por el cuál únicamente cuenta con registros a partir de su creación, la cual data del 10 de julio de 2017.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“Por este medio, impugno la respuesta de la autoridad mediante el oficio 02453/MAIP/FGJ/2024, de fecha 14 de agosto de 2024, que recayó a la solicitud de información de folio 00671/FGJ/IP/2024, en la que menciona que no cuenta con la información porque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se creó el 07 de julio de 2017 y sólo cuenta con registros a partir de su creación. PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN La autoridad omitió realizar una búsqueda exhaustiva y redirigir la solicitud a otras áreas competentes dentro de la misma Fiscalía. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Unidad de Transparencia debió turnar la solicitud a todas las áreas que cuenten con la información o deban tenerla, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. No obra constancia de que la Unidad hubiera agotado todas las opciones disponibles. El argumento de que la información no existe por la creación reciente de la Fiscalía Especializada en 2017 es insuficiente para tener por agotado el procedimiento de acceso a la información pública que se solicitó. La solicitud se refiere al periodo de 2000 a 2010, tiempo en el cual otras áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, o de la actual Fiscalía, habrían estado encargadas de registrar y gestionar las averiguaciones previas o carpetas de investigación de personas servidoras públicas. La Unidad de Transparencia no redirigió la solicitud a otras áreas que, por sus atribuciones, podrían tener la información requerida, como los archivos históricos o el área administrativa responsable antes de la creación de la Fiscalía Especializada. Aceptar la respuesta proporcionada implicaría un criterio restrictivo e incoherente que limitaría el acceso a la información únicamente a registros generados a partir de la creación de nuevas áreas o fiscalías, lo cual no tiene fundamento legal. SEGUNDO MOTIVO DE IMPUGNACIÓN De acuerdo con el artículo 45, fracción III, de la LGTAIP, sólo una vez agotada la búsqueda en todas las áreas competentes, la Unidad de Transparencia debió auxiliar a la solicitante para “[orientarme] sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable”. Esta omisión vulnera el principio de máxima publicidad y transparencia.” (sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

No se advierten manifestaciones de la parte **Recurrente.**

La parte **Recurrente** adjuntó el archivo “Archivo1725479895157null”, al cual no se puede acceder.

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **nueve de septiembre de mil veinticuatro** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. El **ocho de octubre de mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado,** remitió a través de SAIMEX**,** su informe justificado mediante el cual, respecto a los motivos de inconformidad alegados por la parte **Recurrente,** refirió que se solicitó a las áreas que pudieran contar con la información requerida, manifestaran lo conducente, siendo estas la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual reiteró que los registros que obran en la Fiscalía Especializada datan desde la fecha en la que entró en operaciones, es decir, del 10 de julio de 2017, por lo que no cuenta con registros anteriores a esa fecha; la Visitaduría General, la cual manifestó que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos de control interno, la Unidad de Archivos y Reserva a su cargo, no cuenta con un concentrado desglosado, ya que únicamente se registra por número de averiguación, razón por la cual no le es posible dar respuesta a lo peticionado, toda vez que tiene aproximadamente 320,000 expedientes del periodo del cual se requiere la información, por lo que entregarla en los términos precisados, implicaría realizar in procesamiento de la información, al tener que separarse los expedientes uno por uno, a lo cual no está obligado en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al ser la unidad administrativa que conoce y lleva el control de los sistemas institucionales, la cual señaló que para el periodo 2000 a 2010, se contó con dos sistemas, el “Sistema Informático Tarjetades”, y el “Sistema Automatizado de Denuncias SAD”, sin embargo, de la información que se encuentra en dichos sistemas no es posible identificar si de las averiguaciones iniciadas se encontraban personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía General de Justicia.

Finalmente, puntualizó que no se cuenta con la información al nivel de desagregación que solicita la parte Recurrente, pues la información que se encuentra en los sistemas mencionados no permite un filtrado de información.

Una vez analizados los documentos remitidos, se hicieron del conocimiento de la parte **Recurrente,** a efecto de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente.

El **uno de noviembre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** remitió mediante escrito libre sus consideraciones respecto al informe justificado presentado por el **Sujeto Obligado,** en los siguientes términos:

*“En relación con el informe justificado presentado por el sujeto obligado manifiesto lo siguiente:*

*En esencia, el sujeto obligado refiere que:*

1. *Los registros que obran en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició en funciones el 10 de julio de 2017 por lo que no cuenta con información del periodo que se solicitó (2000 a 2010).*
2. *Que para el periodo comprendido de 2000 a 2010 se contó con dos sistemas: el “Sistema informático Tarjetades” y el “Sistema Automatizado de Denuncias (SAD)”, pero que no es posible filtrar la información para “identificar la ocupación de los imputados, es decir, si corresponden a servidores públicos”.*

*Ahora bien, sobre el primer punto, se reitera que el hecho de que la fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción entrara en funciones el 10 de julio de 2017, no es sinónimo de que antes de esa fecha, el sujeto obligado no tuviera obligaciones de investigar delitos cometidos por servidores públicos relacionados con corrupción, ya que antes de esa fecha, específicamente en el periodo de 2000 a 2010 en el que la suscrita pidió información, ya existían en el Código Penal del Estado de México delitos cuyo sujeto activo* ***necesariamente debía tener el carácter de servidor público****, y no solo establece varios delitos donde la calidad de persona servidora pública es un elemento constitutivo del delito, sino que también puede ser una agravante, tal como lo ejemplificaré más adelante.*

*Con respecto al segundo punto, el sujeto obligado acepta que en el periodo comprendido de 2000 a 2010 sí contaron con dos sistemas para el registro de información, pero no cuentan con un filtro de búsqueda para identificar la ocupación de las personas imputadas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en el periodo de 2000 a 2010 el Código Penal del Estado de México sí contemplaba un catálogo de delitos cuyo sujeto activo necesariamente debía tener el carácter de servidor público, por lo que el sujeto obligado, en aras de garantizar el principio de máxima publicidad debió proporcionar, al menos, la información relativa a dichos delitos y en el estado que la tuviere.*

*Por ejemplo, en dicha época, el Código Penal del Estado de México contemplaba los siguientes delitos, cuyo sujeto activo* ***necesariamente debía tener el carácter de servidor público****, y otros delitos donde la calidad de persona servidora pública también puede ser una agravante:*

1. *EJERCICIO ABUSIVO DE FUNCIONES (Artículo 344): Este delito lo comete una persona servidora pública que, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorga ilícitamente contratos, concesiones, permisos, entre otros, para obtener beneficios económicos personales o para terceros cercanos.*
2. *TRÁFICO DE INFLUENCIA (Artículo 345): Se incurre en este delito cuando una persona servidora pública, directa o indirectamente, promueve o gestiona la resolución de negocios públicos de manera ilícita, lo que podría beneficiar a particulares ajenos a sus responsabilidades.*
3. *COHECHO (Artículo 346): Este delito ocurre cuando una persona servidora pública solicita u obtiene dádivas de particulares a cambio de realizar u omitir actos relacionados con sus funciones. Aquí, el ser servidora pública es fundamental para la comisión del delito.*
4. *PECULADO (Artículo 351): Cometido por una persona servidora pública que dispone para su beneficio personal de dinero, fondos, valores o bienes que le han sido confiados en razón de su cargo.*
5. *Así como todos los delitos que ahora forman parte de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, según el Decreto Número 207 publicado el 30 de mayo de 2017; que estaban vigentes en el periodo de la solicitud, como ABUSO DE AUTORIDAD.*
6. *Aunado a la LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE MÉXICO, que en su artículo 2 prevé el delito de tortura y contiene como sujeto activo a quien tenga carácter de servidor público. Ley que también se encontraba vigente en el periodo de la solicitud.*

*Por tanto, la información solicitada por la recurrente debe estar registrada y disponible, dado que el sujeto obligado históricamente ha tenido la obligación de perseguir delitos relacionados con el ejercicio del servicio público.*

*Y si bien, podría no contar con la información en el nivel de desagregación que le fue solicitado, sí era su obligación proporcionar la información en el estado que la tuviera, considerando que debería tener registros o información relacionada con delitos cometidos por servidores públicos y que, al ser la institución con expertiz en la materia tiene conocimiento con respecto a cuáles son aquellos delitos en los que necesariamente se requiere que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público.*

*Por lo anterior, solicito revocar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado y, en su lugar, ordenarle que proporcione la información solicitada en el estado que la tenga, considerando lo expresado anteriormente. “ (sic)*

**7.** **Ampliación del término para resolver**. El **treinta de octubre de dos mil veinticuatro**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **seis de noviembre de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **catorce de agosto de dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente,** se tuvo por presentado eldía **cuatro de septiembre de dos mil veinticuatro**, esto es al décimo quinto día hábil posterior en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Además, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, es de suma importancia señalar que la parte **Recurrente**, no señaló **nombre completo** con el cual desea ser identificado, como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante no proporcionar un nombre no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o* ***seudónimo*** *serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

De acuerdo al análisis efectuado se advierte que resulta procedente la interposición del recurso y se concluye la acreditación plena de todos y cada uno de los elementos formales exigidos por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios en vigor, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el **SAIMEX.**

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones I y III del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I****. La negativa a la información solicitada;*

***...***

***III****. La declaración de inexistencia de la información;”*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la **entonces** Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía de esta entidad, en el periodo de 2000 a 2010.

2. El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, en el periodo de 2000 a 2010.

3. El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, en el periodo de 2000 a 2010, desglosando la información por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (si es el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial.

4. El número de averiguaciones previas o carpetas de investigación (según el sistema penal vigente) que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad en esta entidad, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, por hechos ocurridos en 2005 y 2006, desglosando la información por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (si es el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial.

En respuesta, el **Sujeto Obligado,** por conducto de la Titular de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento de la persona solicitante que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que el 07 de julio de 2017, se creó dicha Fiscalía, conforme a lo señalado en el acuerdo 10/2017, y el 10 de julio del mismo año inició operaciones, motivo por el cuál únicamente cuenta con registros a partir de su creación, la cual data del 10 de julio de 2017.

Al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, donde señaló como motivo de inconformidad, que la Unidad de Transparencia debió turnar la solicitud a todas las áreas que cuenten con la información o deban tenerla, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, sin embargo, no obra constancia de que se hubieran agotado todas las opciones disponibles, al considerar que en el periodo del cual se requiere la información otras áreas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, o de la actual Fiscalía, habrían estado encargadas de registrar y gestionar las averiguaciones previas o carpetas de investigación de personas servidoras públicas, asimismo, argumentó que una vez agotada la búsqueda en todas las áreas competentes, la Unidad de Transparencia debió auxiliarle u orientarle sobre los Sujetos Obligados competentes conforme a la normatividad aplicable.

Durante la etapa de manifestaciones el **Sujeto Obligado** hizo del conocimiento de la parte **Recurrente** el pronunciamiento emitido por los servidores públicos habilitados de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Visitaduría General, y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, cuyos términos serán analizados en líneas posteriores.

No obstante, la parte la **Recurrente** manifestó en lo medular que la información que solicitó ya existía en el Código Penal del Estado de México anterior a la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al contemplase diversos delitos en los cuales el sujeto activo debía tener el carácter de servidor público, siendo este un elemento constitutivo del delito o agravante del mismo.

Asimismo, manifestó que el Sujeto Obligado aceptó que en el periodo comprendido de 2000 a 2010 sí contaron con dos sistemas para el registro de información, pero no cuentan con un filtro de búsqueda para identificar la ocupación de las personas imputadas, no obstante, debió proporcionar al menos, la información relativa a los delitos que ya se encontraban catalogados en el Código Penal del Estado de México, cuyo sujeto activo necesariamente debía tener el carácter de servidor público, ya que a su consideración, la información requerida debe estar registrada y disponible, dado que el sujeto obligado históricamente ha tenido la obligación de perseguir delitos relacionados con el ejercicio del servicio público, y si bien, podría no contar con la información en el nivel de desagregación que le fue solicitado, estima que es su obligación proporcionarla en el estado que la tuviera.

Una vez establecidas las posturas de las partes, es imprescindible mencionar que las Unidades de Transparencia, son el área responsable en cada Sujeto Obligado para dar atención a las solicitudes de información que se realicen al amparo de la Ley, el responsable de dicha área funge como enlace entre el Sujeto Obligado y los solicitantes, y tiene bajo su responsabilidad el tramitar internamente la solicitud de información.

De tal manera que, si bien el Titular de la Unidad de Transparencia no tiene bajo su resguardo el archivo que contiene la documentación en donde consta la información solicitada, esta puede obrar en las distintas áreas que conforman la estructura orgánica del Sujeto Obligado, es por ello que debe turnar la solicitud al servidor público habilitado que tiene bajo su resguardo la misma, de conformidad con los artículos 53, fracciones II y IV y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por su parte, los servidores públicos habilitados, quienes son designados por el titular de cada Sujeto Obligado derivado de la propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia, son las personas encargadas dentro de las diversas unidades administrativas o áreas de los Sujeto Obligado, de apoyar, gestionar y entregar la información o datos personales que se ubiquen en la misma, a sus respectivas unidades de transparencia; respecto de las solicitudes presentadas, y aportar en primera instancia el fundamento y motivación de la clasificación de la información, teniendo como función buscar, localizar y en su caso entregar la información solicitada, así como integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta y verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los supuestos de información clasificada, de conformidad con los artículos 3, fracción XXXIX, 58 y 59, de la Ley de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De lo manifestado con antelación se advierte que la persona Titular de la Unidad de Transparencia debe garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que puedan contar con la información, con el objeto de que los servidores públicos habilitados realicen la búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, y que una vez localizada, la misma sea proporcionada a las personas solicitantes atendiendo a la naturaleza jurídica de la misma.

En el caso particular, la Unidad de Transparencia turnó la solicitud la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a la Visitaduría General y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, al considerar que dichas áreas cuentan con competencia para conocer de la información que es del interés de la persona solicitante.

Cabe mencionar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, además de las atribuciones que se prevén en el artículo 34 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para el Ministerio Público, tiene a su cargo entre otras, las siguientes atribuciones de conformidad con el artículo 29 Bis de la misma Ley:

- Investigar, perseguir y ejercer sus atribuciones en los delitos por hechos de corrupción, incluso en grado de tentativa, cometidos por toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los Ayuntamientos de los municipios, sus organismos auxiliares, así como de los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas, de los órganos constitucionales autónomos del Estado de México, de los representantes de elección popular de los ámbitos estatal y municipal, los particulares relacionados con el servicio público, así como en cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos estatales y municipales.

- Investigar y perseguir los delitos en los que exista corrupción y otros que se puedan derivar de ésta, incluso en grado de tentativa, en los que participen particulares que reciban o hagan uso de recursos públicos, así como su participación en delitos cometidos por servidores públicos.

- Investigar delitos en los que exista corrupción, en coordinación o auxilio de otras fiscalías, o procuradurías de justicia de las entidades federativas o de la Federación.

- Implementar mecanismos de coordinación con autoridades en materia de control, supervisión, evaluación o fiscalización a fin de fortalecer el desarrollo de las investigaciones en los delitos por hechos de corrupción.

- Recibir por sí o por conducto de cualquier unidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las denuncias y puestas a disposición de personas por la posible comisión de delitos por hechos de corrupción.

- Ejercitar acción penal en contra de los servidores públicos o particulares relacionados con la comisión de delitos por hechos de corrupción.

Por otro lado, de conformidad con los artículos 49 Ter y 49 Quater de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Visitaduría General es el órgano de inspección, supervisión, evaluación e investigación de la Fiscalía, el cual está a cargo de un agente del Ministerio Público, entre cuyas atribuciones se encuentran las siguientes:

- Realizar visitas de inspección ordinarias, extraordinarias y especiales, a fin de verificar la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía, para corroborar el debido cumplimiento de la función sustantiva de la misma, elaborar las actas correspondientes, y realizar las observaciones, recomendaciones e instrucciones para mejorar el servicio y evitar la continuación de deficiencias o irregularidades, así como rendir los informes que sean necesarios. Se entenderá por actividad sustantiva la encaminada al cumplimiento de las atribuciones de la Fiscalía, previstas en esta Ley, en la de Seguridad del Estado de México y demás disposiciones aplicables.

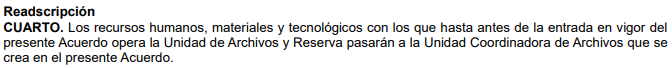
- Iniciar oficiosamente los procedimientos de investigación administrativa, cuando en la realización de las visitas o de las evaluaciones técnicas y jurídicas que se realicen en las distintas unidades administrativas de la Fiscalía, se detecten faltas u omisiones que contravengan esta Ley, las leyes en materia de seguridad pública, y demás disposiciones jurídicas aplicables al personal operativo, así como cuando una denuncia o queja tenga indicios de posible infracción administrativa.

- Dar vista al Órgano Interno de Control cuando conozca de alguna conducta que pueda ser constitutiva de una falta administrativa, que no sea de su competencia, así como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando se trate de posibles hechos de corrupción.

- Recibir, por cualquier vía, las quejas y denuncias que formulen los particulares y las autoridades, o que por cualquier otro medio se tenga conocimiento, sobre actos u omisiones en el desempeño de las funciones de los servidores públicos.

- Practicar las diligencias necesarias para la investigación de las quejas y denuncias que conozca, integrando los expedientes correspondientes, para determinar si procede solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa al órgano substanciador o, en su caso, una investigación penal a la Fiscalía correspondiente.

Asimismo, es importante mencionar que hasta el treinta de octubre de dos mil veinticuatro, la Visitaduría General tuvo a su cargo a la Unidad de Archivos y Reserva, fecha en la cual se creó la Unidad Coordinadora de Archivos, como consta en el ACUERDO NÚMERO 14/2024 POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVOS Y SE INTEGRA EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el cual, en su TRANSITORIO CUARTO, dispone que, los recursos humanos, materiales y tecnológicos con los que operaba, pasarían a la Unidad Coordinadora de Archivos, como se lee en seguida para mejor referencia:



En este sentido, se colige que **la Unidad de Archivos y Reserva**, a la fecha de presentación de la solicitud, **era la unidad administrativa responsable del Archivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México**, y por tanto de aplicar las disposiciones contenidas en la Ley General de Archivos, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado de México, los Lineamientos para la Administración de Documentos en el Estado de México y demás normatividad en materia de administración archivística, cuyo objeto primordial es establecer los principios, métodos y procedimientos orientados a lograr una eficiente planeación, organización, dirección, control y funcionamiento de los archivos o de la producción, circulación, conservación, uso, selección y destino final de los documentos.

Finalmente, la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, de conformidad con el ACUERDO NÚMERO 09/2020, POR EL QUE SE CREAN DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SE ESTABLECEN SUS FUNCIONES, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, el once de junio de dos mil veinte, cuenta con las siguientes atribuciones en su parte conducente:

*“****Atribuciones***

***ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO****. La Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, tendrá las siguientes atribuciones:*

***I.*** *Coordinar y supervisar las actividades en materia de desarrollo y automatización de procesos informáticos con el propósito de brindar servicios de calidad, oportunos y seguros;*

***II.*** *Contribuir con el avance tecnológico que demandan los sistemas informáticos y las tecnologías de información de la Fiscalía General;*

***III.*** *Organizar y coordinar los procesos para el diseño y construcción de los sistemas informáticos;*

***VI.*** *Coordinar el apoyo en la operación del Sistema Integral de Información y Procesos en todas las Fiscalías Regionales, Especializadas, Especiales y unidades administrativas;*

***VII.*** *Coordinar y supervisar el avance de los indicadores de los proyectos de sistematización de procesos;*

***XVI. Coordinar y controlar la clasificación y resguardo de los archivos documentales y electrónicos de la Fiscalía General;***

***XVII****. Apoyar los desarrollos y proyectos de sistemas informáticos para el procedimiento penal y sus mejoras;”*

Derivado de lo anterior, si bien en un primer momento la Unidad de Transparencia se limitó a turnar la solicitud a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en la etapa de manifestaciones requirió la información a la Visitaduría General, que conoce de los hechos de corrupción realizados por los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, asimismo, tenía a su cargo a la Unidad de Archivos y Reserva, a la fecha de presentación de la solicitud; y a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que conoce de los sistemas informáticos institucionales, coordina y controlar la clasificación y resguardo de los archivos documentales y electrónicos de la Fiscalía General, áreas que cuentan con competencia para conocer de la información que es del interés de la persona solicitante.

En este tenor, tomando en consideración la materia de la solicitud, la cual versa sobre información estadística del periodo comprendido de 2000 a 2010, donde se requiere específicamente el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en contra de personas servidoras públicas adscritas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México o la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en contra de personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad del Estado de México en el municipio de Ecatepec de Morelos, de 2000 a 2010 y de 2005 a 2006, en donde se desglosara la información por cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (de ser el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial, es que toma relevancia el pronunciamiento emitido por los servidores públicos habilitados de la Visitaduría General y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, quienes en lo conducente, manifestaron lo siguiente:

- Visitaduría General: después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos de control interno, la Unidad de Archivos y Reserva **no cuenta con un concentrado desglosado**, ya que únicamente se registra por número de averiguación, razón por la cual no le es posible dar respuesta a lo peticionado, toda vez que tiene aproximadamente 320,000 expedientes del periodo del cual se requiere la información, por lo que entregarla en los términos precisados, implicaría realizar in procesamiento de la información, al tener que separarse los expedientes uno por uno.

- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones: señaló que para el periodo 2000 a 2010, se contó con dos sistemas, el “Sistema Informático Tarjetades”, y el “Sistema Automatizado de Denuncias SAD”, sin embargo, de la información que se encuentra en dichos sistemas **no es posible identificar si de las averiguaciones iniciadas se encontraban personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía General de Justicia.** Finalmente, puntualizó que no se cuenta con la información al nivel de desagregación que solicita la parte Recurrente, pues la información que se encuentra en los sistemas mencionados no permite un filtrado de información.

Atento a lo anterior es claro que los servidores públicos se encuentran imposibilitados para satisfacer la solicitud de información en los términos que requiere la persona solicitante, ya que si bien, por mandato constitucional el **Sujeto Obligado** cuenta con competencia para conocer e investigar hechos que pudieran constituir delitos, entre los que se encuentran las conductas realizadas por servidores públicos que refirió la parte **Recurrente** en la etapa de manifestaciones, previstas en el Código Penal del Estado de México, lo cierto es que de la normatividad en análisis no se advirtió disposición alguna referente a la recopilación de datos o registros específicos de los asuntos que conoce la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en consecuencia, la Visitaduría General y Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, no están en posibilidad de identificar aquellos expedientes que cumplan con las características que la persona solicitante señala, esto es: específicamente averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas en contra de servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México o la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Secretaría de Seguridad del Estado de México, y de manera especial, de servidores públicos adscritos a estas últimas dependencias, en el municipio de Ecatepec de Morelos, durante la temporalidad que se precisa.

Ya que, para satisfacer el requerimiento en los términos que se solicita, en caso de existir, la información estaría inmersa en el texto de cada expediente derivado de las averiguaciones previas o carpetas de investigación y al no haber registro específico de ello como refirió la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, sería necesario que el **Sujeto Obligado** realizara un procesamiento o una investigación en todos los expedientes que se hubieran iniciado en el periodo comprendido de 2000 a 2010, los cuales, como refirió la Unidad de Archivos y Reserva ascienden a un aproximado de 320,000, a efecto de identificar aquellos que cumplan con las características que señaló la persona solicitante, y posteriormente, generar un documento ad hoc por medio del cual informara los hallazgos, y desglosara los datos que se requieren.

De tal manera que basta con la aseveración por parte de los servidores públicos habilitados**,** en relación con la ausencia de registros, informes o variables que les permitan proporcionar la información requerida al grado de detalle que se solicita**,** para tener por satisfecho el Derecho de acceso a la información de la persona solicitante, **respecto de las áreas a su cargo**; siendo que de conformidad con lo establecido en el artículo 12, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los Sujetos Obligados solo proporcionaran la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre, en sentido contrario, no están obligados a proporcionar lo que no tengan en sus archivos, y menos aún, se encuentran obligados a generar documentos a fin de atender las solicitudes de acceso a la información que les sean formuladas conforme al interés de las personas solicitantes, tal y como se desprende del mismo texto del artículo 12 de la Ley de la Materia en consulta.

Sin embargo, no puede tenerse por satisfecho el Derecho de acceso a la información de la persona solicitante, en virtud de que **no se agotó el procedimiento de búsqueda**, el cual se constituye como la garantía primaria del derecho humano de acceso a la información pública, que se rige por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a las personas solicitantes con el fin de otorgar la protección más amplia de éste derecho.

Para sustentar dicho argumento, es preciso mencionar que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el **Sujeto Obligado** cuenta con las siguientes atribuciones en su parte conducente:

***“Artículo 10.*** *La Fiscalía contará con las atribuciones siguientes:*

***I****. Ejercer las facultades que la Constitución Federal, la Constitución del Estado y las demás disposiciones jurídicas aplicables le confieren al Ministerio Público, a la Policía de Investigación y a los Servicios Periciales, así como en materia de Justicia Restaurativa, en el ámbito de su competencia.*

*…*

***IV****. Coadyuvar con las instituciones de Procuración de Justicia de la Federación y de las entidades federativas, en la investigación de los delitos y en la persecución de los imputados, en los términos de su normatividad y de los convenios correspondientes y demás instrumentos jurídicos que se formalicen al respecto.*

*…*

***XVII. Establecer medios de información sistemática y directa con la sociedad, de sus actividades, garantizando el acceso a la información de la Fiscalía, en los términos y con las limitantes establecidas en la Constitución Federal, la Constitución del Estado y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.***

*…*

***XIX.*** *Atender de manera oficiosa las denuncias que se presenten por hechos que puedan ser constitutivos de delitos relacionados con la violencia de género.*

***XX. Compartir las bases de datos e información de que disponga en materia delictiva para la consolidación de una plataforma única de información preventiva y para la investigación de los delitos.”***

Como se advierte, al Fiscalía General de Justicia del Estado de México, entre otras funciones, se encarga de compartir las bases de datos e información de que disponga en materia delictiva para la consolidación de una plataforma única de información preventiva y para la investigación de los delitos.

En este sentido, de conformidad con el Manual General de Organización vigente, la Dirección General de Información, Planeación, Programación e Información, tiene como objetivo y funciones principales, las siguientes:

“213410000 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

*“****OBJETIVO****: Dirigir y avalar el proceso de planeación, programación, presupuesto y evaluación de las actividades realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, mediante el diseño e implementación de estrategias de coordinación, acopio y sistematización de información.*

***FUNCIONES:***

*[…]*

*-* ***Revisar y validar la información estadística que generen las unidades administrativas […] y mantener su actualización permanente.”***

De lo anterior se desprende queel **Sujeto Obligado,** por conducto de la Dirección General de Información, Planeación, Programación e Información, se encarga de **revisar y validar la información estadística** **que generen las unidades administrativas y mantener su actualización permanente,** sin embargo, **en el expediente electrónico no obra constancia de que la solicitud se hubiera turnado a dicha área para su atención.**

Por otro lado, respecto del pronunciamiento emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, es oportuno mencionar que no otorga certeza, ya que si bien, como lo mencionó la servidora pública habilitada, dicha Fiscalía se creó el 07 de julio de 2017, e inició operaciones el día 10 de mismo mes y año, no pasa desapercibido para este Organismo Garante el contenido del transitorio CUARTO del ACUERDO NÚMERO 10/2017, POR EL QUE SE CREA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, que es del tenor literal siguiente:

*“****Asuntos en trámite y recursos humanos, materiales y tecnológicos***

***CUARTO.- Los asuntos en trámite****, así como los recursos humanos y materiales* ***a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, serán asignados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción****.”*

Del precepto en cita se colige que anterior a la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, existía la **Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos**, asimismo, que, los asuntos a cargo de esta última, a la fecha de creación, fueron asignados a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, siendo esta responsable de concluir los mismos.

Cabe señalar además, que de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, el Subprocurador de Atención Especializada, se auxiliaba para el despacho de los asuntos a su cargo, de diversas unidades administrativas, entre las que se encontraban la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales y la Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, como se lee enseguida para mejor referencia:

*“****Artículo 32****. El Subprocurador de Atención Especializada, para el despacho de los asuntos a su cargo, se auxiliará de las unidades administrativas básicas siguientes:*

*…*

***IV.*** *Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales;*

*…*

***VI.*** *Fiscalía Especializada de Delitos Cometidos por Servidores Públicos;”*

Posteriormente, se amplió el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que también conociera de los delitos cometidos por integrantes de corporaciones policiales, con lo cual se dio por concluida la operación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, como consta en el ACUERDO NÚMERO 12/2015, POR EL QUE SE AMPLÍA EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, Y SE DA POR CONCLUIDA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, el tres de julio de dos mil quince.

En este tenor, contrario a lo manifestado por la servidora pública habilitada, es evidente que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, si bien pudo no haber generado la información materia de la solicitud derivado de su creación en el ejercicio 2017, ello no le exime de conocer de los asuntos iniciados con fecha anterior, que estuvieran en trámite a la fecha en la que inició operaciones, entre los cuales pudieran encontrarse asuntos incoados de 2000 a 2010.

Lo anterior dado que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se hizo cargo de los asuntos en trámite de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual, a su vez, asumió la competencia para conocer delitos cometidos por integrantes de corporaciones policiales, haciéndose cargo de los asuntos en trámite que llevaba la Fiscalía Especializada de Delitos Dolosos Cometidos por Corporaciones Policiales al tres de julio de dos mil quince.

Bajo esta línea de pensamiento, se estima que la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** careció de los principios de congruencia y exhaustividad, como se despende del Criterio de interpretación, con clave de control SO/002/2017 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de rubro y texto siguientes:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,* ***la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado****; mientras que* ***la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados****. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Por lo anterior, este Organismo Garante, con la finalidad de garantizar el Derecho humano de acceso a la información de la parte **Recurrente,** y a fin de reparar el agravio causado ante la omisión en que incurriera el **Sujeto Obligado**, ya que, como se señaló, su respuesta careció de los principios de congruencia y exhaustividad al no haberse turnado a todas las áreas competentes y no haberse realizado la búsqueda exhaustiva en los archivos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se estima procedente ordenar que, previa búsqueda exhaustiva y razonable, se haga entrega, en versión pública de ser necesario, del soporte documental que dé cuenta al mayor grado de desagregación posible del número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, según el sistema penal vigente, que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México; de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad del Estado de México; y de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, del uno de enero de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, señalando, para el caso de la información de Ecatepec de Morelos, en la medida de lo posible, los siguientes datos: cargo o adscripción de la persona, fecha de radicación, fecha de inicio del proceso penal, hechos imputados y/o delito, fecha de los hechos y localidad o colonia en que ocurrieron, fecha de la audiencia inicial (si es el caso), fecha de la audiencia de vinculación a proceso o auto de término constitucional (dependiendo del sistema penal vigente en la época), si se optó o no por un mecanismo alterno de solución de controversias, fecha de terminación anticipada (de ser el caso), fecha de la audiencia de juicio (de ser el caso), fecha y sentido de la última determinación judicial.

No obsta mencionar que en el presente asunto la información requerida corresponde con información estadística, que deriva de los expedientes formados con motivo de la comisión de un hecho constitutivo de delito, de acuerdo con lo previsto en el Código Penal del Estado de México, por lo que no se encontraría en ningún supuesto de **reserva**, ya que únicamente se daría a conocer **el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, en contra de servidores públicos.**

Sierve de sustento a lo anterior, el Criterio de interpretación con clave de control SO/008/2023, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de rubro y texto siguientes:

*“****Ejercicio del derecho de Acceso a la Información Pública. La información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la que se encuentre vinculada.*** *Considerando que la información estadística es el producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso sistemático de captación de datos primarios obtenidos sobre hechos que constan en documentos que los sujetos obligados poseen, derivado del ejercicio de sus atribuciones; con base en lo dispuesto por el artículo 70 fracción XLVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público, entre otra, la relativa a la que con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, por lo que es posible afirmar que la información estadística es de naturaleza pública, siempre y cuando los datos estadísticos no se encuentren individualizados o personalizados a casos o situaciones específicas, que pudieran llegar a justificar su clasificación.”*

Asimismo, se insiste que del análisis efectuado en el marco normativo aplicable, no se advirtió fuente obligacional que constriña al Sujeto Obligado a generar estadística de la información solicitada, por lo que si derivado de la búsqueda que se ordena no se llegara a localizar documento alguno que satisfaga lo solciitado, por no haberse generado, bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante para tener por colmado su derecho de acceso a la información, atendiendo las formalidades que establece el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

*“****Artículo 19****…*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.”*

En tal supuesto, es improcedente la entrega de documento alguno, o en su caso, el Acuerdo de Inexistencia, toda vez que el pronunciamiento del **Sujeto Obligado** declararía en automática la inexistencia de la información solicitada de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**De la temporalidad en la conservación de los archivos.**

Toda vez que en el presente asunto se requiere información desde el año 2000 al 2010, es conveniente señalar los siguientes conceptos de acuerdo a los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, cuyo objeto es “establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización, así como para **la custodia y conservación de los archivos** en posesión de los sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con sistemas de información, ágiles y eficientes”, al tenor de lo siguiente:

*“****Cuarto.***

*(…)*

***II. Archivo****: El conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos por los sujetos obligados o los particulares en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades;*

***III. Archivo de concentración****: La unidad de la administración de documentos cuya consulta es esporádica y que permanecen en ella hasta su transferencia secundaria o baja documental;*

***IV. Archivo histórico****. La unidad responsable de la administración de los documentos de conservación permanente y que son fuente de acceso público;*

***V. Archivo de trámite****: La unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, los cuales permanecen en ella hasta su transferencia primaria;*

***VIII. Baja documental****. La eliminación de aquella documentación que haya prescrito en sus valores administrativos, legales, fiscales, contables, y que no contenga valores históricos;*

*(…)*

***X. Ciclo vital del documento****: La etapas de los documentos desde su producción o recepción hasta su baja o transferencia a un archivo histórico;*

*(…)*

***XLVIII. Transferencia documental****: El traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración (transferencia primaria) y de expedientes que deben conservarse de manera permanente, del archivo de concentración al archivo histórico (transferencia secundaria);*

Por lo expuesto, se colige que los documentos cuentan con un ciclo vital, entendiéndose como las etapas a las que se someten desde su producción o recepción hasta su baja o transferencia a un archivo histórico; siendo el Archivo de Trámite la primera etapa, en la que se depositan todos los archivos de uso cotidiano y que son necesarios para el ejercicio de las atribuciones de una entidad administrativa, y en la que permanecen hasta su transferencia primaria al Archivo de Concentración; en esta etapa se mantienen los archivos de consulta esporádica y permanecen allí hasta su transferencia secundaria al Archivo Histórico o su baja documental.

Por su parte, los Lineamientos para la Valoración, Selección y Baja de los Documentos, Expedientes y Series de Trámite Concluido en los Archivos del Estado de México, emitidos por la Comisión Dictaminadora de Depuración de Documentos, establecen lo siguiente en su parte conducente:

*“****Artículo 20.*** *Los expedientes de trámite concluido y los desclasificados se mantendrán íntegros por un periodo de dos años en los Archivos de Trámite de las Unidades Administrativas. Cumplido este plazo se podrá proceder a su selección preliminar y transferencia al Archivo de Concentración.”*

*El periodo señalado se computará a partir del día siguiente a la fecha del documento con el cual se dé por concluido el asunto por el que los expedientes fueron creados.*

*…*

***Artículo 27****.- Las Unidades Administrativas al realizar la transferencia de los expedientes de trámite concluido, señalarán en el Inventario correspondiente los plazos de conservación precaucional de éstos en el Archivo de Concentración.*

*Para determinar el plazo de conservación precaucional deberán considerar el marco legal o administrativo bajo el cual se produjeron o recibieron los documentos y los siguientes períodos:*

***I****. 6 años para expedientes con información administrativa;*

***II.*** *6 años como mínimo para expedientes con información fiscal y presupuestal contable;*

***III****. 12 años como mínimo para expedientes con información jurídico-legal, obra pública y activo fijo; y*

***IV.*** *Cuando en la legislación se establezcan períodos de conservación mayores a los señalados en las fracciones I, II y III, se considerarán los estipulados en dicha legislación para efectos de realización del proceso de selección final.*

***V****. Cuando las Unidades Administrativas no indique el plazo de conservación precaucional de sus expedientes en el Inventario correspondiente, los Archivos de Concentración podrán rechazar la transferencia de los expedientes.”*

En apego de lo anterior, se tiene que una vez que los documentos generados se consideran como trámite concluido, pasan a formar parte del Archivo de Trámite por dos años; concluido el plazo, se transfieren al Archivo de Concentración para mantenerse **allí por seis años cuando los expedientes contengan información administrativa; y una vez que concluye dicho periodo, los documentos pueden causar baja documental** o bien, formar parte del Archivo Histórico.

Es de señalar que, para efectuar la baja, deberá emitirse el acta de baja documental, el cual se concibe como el documento por el que el Comité de Selección Documental o el titular de la Unidad Administrativa a la cual se encuentre adscrito el Archivo de Trámite, autoriza la baja de los documentos resultantes del proceso de selección preliminar aplicado a los expedientes de trámite concluido, como paso previo a su transferencia a un Archivo de Concentración.

En ese sentido, tenemos que los documentos requeridos toda vez que datan desde el año dos mil, pudieran encontrarse en el supuesto de que agotaron su vida útil y/o no se consideraron de importancia para formar parte del Archivo Histórico, **pudiendo haber causado baja.**

Sin embargo, cabe mencionar que el referir esto, no colma el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; es decir, el simple pronunciamiento de las autoridades respecto a la baja documental o el hacer entrega al ciudadano del acta de baja como justificación de la negativa de la información, no es suficiente para satisfacer el ejercicio del derecho de acceso.

Atento a lo anterior, si derivado de la búsqueda que se efectúe, el **Sujeto Obligado** no llegara a localizar información en el periodo que se requiere, se deberá acreditar el destino de la misma, es decir; se deberá precisar si esta se envió a su archivo histórico o se procedió a su baja permanente, asimismo, deberá señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que precedieron a la inexistencia de la información, con la finalidad de otorgar certeza jurídica a la persona solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior por analogía el Criterio 14-09 que emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que a la letra dice:

***“Baja documental****. Las dependencias y entidades deben proporcionar a los particulares el documento que acredite dicha situación. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 46 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 70, fracción V y 78, fracción III de su Reglamento,* ***las dependencias y entidades deberán expedir una resolución que comunique a los solicitantes la inexistencia de la información requerida, en caso de que ésta no sea localizada en los archivos de la dependencia o entidad de que se trate después de una búsqueda exhaustiva. En este supuesto, las dependencias y entidades deberán acompañar a la resolución por la que se confirma la declaración de inexistencia, el acta de baja documental, esto es, el documento mediante la cual se acredita la legal destrucción de la información solicitada,*** *en todos aquellos casos en los que la normatividad en materia archivística prevea que la misma debe existir.”(Sic)*

En tal caso la declaratoria formal de la inexistencia a la que se hace referencia deberá realizarse en términos de lo que señala el artículo 19, tercer párrafo, 49, fracciones II y XIII; 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que se leen como sigue:

*“****Artículo 19.*** *(…)*

***Si el sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debía generar, poseer o administrar la información, pero ésta no se encuentra, el Comité de transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia****, debidamente fundado y motivado, en el que detalle las razones del por qué no obra en sus archivos.”*

*“****Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***atribuciones****:*

***II.******Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de*** *ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y* ***declaración de inexistencia*** *o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;*

***XIII.******Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información*** *que les remitan las unidades administrativas y resolver en consecuencia…”*

*“****Artículo 169****.* ***Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia****:*

***I.*** *Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información;*

***II.******Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento****;*

***III****. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y*

***IV.*** *Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.*

*La Unidad de Transparencia deberá notificarlo al solicitante por escrito, en un plazo que no exceda de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.*

*Este plazo podrá ampliarse hasta por otros siete días hábiles, siempre que existan razones para ello, debiendo notificarse por escrito al solicitante.”*

*“****Artículo 170.******La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos******que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo****, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la existencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.”*

Lo anterior, como se precisa, resulta necesario ya que el Acuerdo de Inexistencia emitido por el Comité de Transparencia, da certeza de las razones o motivos por las cuales no se localizó la información y del proceso realizado para localizar la misma, acreditando en un primer momento la búsqueda exhaustiva y razonable de la información en las áreas administrativas, lo cual constará mediante los oficios emitidos y las respuestas por parte de los servidores públicos de las áreas correspondientes, ello con la finalidad de que se informe si los documentos solicitados habían causado baja documental.

Asimismo, resulta aplicable el Criterio reiterado número 08/19 emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que precisa:

*“****INEXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. SUPUESTOS PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DE LA****. De conformidad con los artículos 19, párrafo tercero y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el Comité de Transparencia deberá emitir un acuerdo de inexistencia de información debidamente fundado y motivado, para justificar por qué no obra en los archivos del Sujeto Obligado la información que deriva de las facultades, competencias y atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan, la cual debió generar, poseer y administrar. Por tanto, en términos de los numerales previamente citados, el referido acuerdo de inexistencia procede en los siguientes momentos: a) cuando no se generó, poseyó o administró el documento teniendo la obligación conforme a la presunción legal que deriva de las facultades, competencias y atribuciones que los ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan; b) que habiendo sido generada, poseída o administrada, por algún motivo ya no se cuenta con la información solicitada; o bien, c) cuando el Sujeto Obligado fue omiso en ejercer una facultad, competencia o atribución inexcusable. Supuestos que, de actualizarse, deberán acreditarse con las exigencias legales contempladas en los numerales 49, fracción II, 169 y 170 de la Ley de Transparencia de la entidad, a través de una resolución del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado que confirme la inexistencia de la información, acto jurídico que genera certeza jurídica al particular de que se realizó un criterio de búsqueda exhaustivo y razonable con la debida justificación de la falta de información y en su caso, las consecuencias de ello.”*

Lo anterior, obedece a lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual destaca que quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de esta; vinculando inminentemente al servidor público con los documentos que por el ejercicio de sus funciones obra en su poder, lo que impone un compromiso en su cuidado y resguardo.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen fundados, siendo procedente *Revocar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Quinto. Versión Pública.** Como fue debidamente apuntado, el **Sujeto Obligado** debe satisfacer la solicitud de acceso a la información; sin embargo, dada la naturaleza de la información de la cual se ordena su entrega, deberá hacerse en versión pública, toda vez que en los documentos que se ordenan, existe la posibilidad de que obren datos que son considerados confidenciales, cuyo acceso debe ser restringido que deben testarse al momento de la versión pública, atento a lo siguiente:

El derecho de acceso a la información pública tiene como limitante el respeto a la intimidad y a la vida privada de las personas, es por ello que este Instituto debe cuidar que los datos personales que obren en poder de los Sujetos Obligados sean protegidos y únicamente se den a conocer aquéllos que garanticen la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas.

De este modo, en armonía entre los principios constitucionales de máxima publicidad y de protección de datos personales, la ley permite la elaboración de versiones públicas en las que se suprima aquella información relacionada con la vida privada de las personas.

Al respecto, los artículos 3, fracciones IX, XX, XXI, XXXII, XLV; 6, 91, 132, 137, 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente establecen:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

*…*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial****: Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

*…*

***XXXII. Protección de Datos Personales****: Derecho humano que tutela la privacidad de datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares;*

*…*

***XLV. Versión pública****: Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

***Artículo 6****. Los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables, por lo que los sujetos obligados no deberán proporcionar o hacer pública la información que contenga, con excepción de aquellos casos en que deban hacerlo en observancia de las disposiciones aplicables. En el caso de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición; los principios, procedimientos, medidas de seguridad en el tratamiento y demás disposiciones en materia de datos personales, se deberá estar a lo dispuesto en las leyes de la materia.*

*…*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.  
…*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

***…***

***Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

***Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable...”*

De los preceptos anteriores se desprende que cuando un documento que vaya a ser entregado vía acceso a la información pública, contenga tanto información de interés público como información que debe ser clasificada, se hará la entrega del mismo, testando las secciones o datos que deban ser clasificados; por ende el **Sujeto Obligado** deberá proceder a testar los datos personales que se encuentre contenidos en los documentos a entregar para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte Recurrente, esto es, los datos concernientes a una persona identificada o identificable, o aquellos datos que tengan el carácter de sensibles, es decir los que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleven un riesgo grave para aquel de acuerdo a los que señala la fracción XII del artículo 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujeto Obligados del Estado de México.

Datos que deberá clasificar como confidenciales por tratarse precisamente de información privada, puesto que los datos personales son irrenunciables, intransferibles e indelegables y los Sujetos Obligados no deberán hacer entrega de los mismos a personas ajenas a su titular.

En tal contexto, es de señalar que la clasificación de la información no opera con la simple supresión de datos que se haga en los documentos de que se trate o con la simple decisión que tome el Servidor Público Habilitado o el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, sino que ello deberá realizarse en términos de lo que disponen los artículos 49 fracción VIII, 53, fracción X y 59, fracción V, de la Ley en consulta, cuyo sentido literal es el siguiente:

***“Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***VIII. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información****…”*

*“****Artículo 53.*** *Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes* ***funciones****:*

***X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información****…”*

***“Artículo 59.*** *Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las* ***funciones*** *siguientes:*

***V. Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información****, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta…”*

Denotándose de dichos elementos normativos que el determinar la clasificación de la información es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego ésta presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y finalmente sea éste último quien apruebe, modifique o revoque la clasificación de la información solicitada.

A su vez, en el caso de información de carácter confidencial, se debe atender a lo que señala el artículo 149 de la Ley de Transparencia Local vigente, que se lee como sigue:

*“****Artículo 149.*** *El* ***acuerdo que clasifique la información como confidencial*** *deberá contener un razonamiento lógico en el que demuestre que la información se encuentra en alguna o algunas de las hipótesis previstas en la presente Ley.”*

Es decir, el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, deberá elaborar acuerdo que contenga un razonamiento lógico con el que se demuestre que la información que se testa de las versiones públicas que se sirva elaborar, encuadra en alguna de las hipótesis que contempla la Ley de la Materia en su artículo 143; ya que de lo contrario, se crearía la incertidumbre jurídica en relación a si lo entregado es formalmente una versión pública, o un documento ilegible, incompleto o tachado; en otras palabras si no se exponen de manera puntual las razones de la versión pública de la documentación entregada se estaría violentando el derecho de acceso a la información de la persona solicitante.

Asimismo, respecto a las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, los Lineamientos Quincuagésimo y Quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, señalan lo siguiente:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

Para la elaboración de las versiones públicas, además, se deberán observar las formalidades establecidas en los Lineamientos Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, que establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso específico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

*…*

***Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **05369/INFOEM/IP/RR/2024**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **Revoca** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado,** en términos de los **Considerandos** **Cuarto** y **Quinto** de esta resolución, haga entrega, vía **SAIMEX,** en versión pública de ser procedente, de lo siguiente del uno de enero de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos mil diez:

1. El o los documentos donde conste el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, según el sistema penal vigente, que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México y de la actual Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad del Estado de México.

2. El o los documentos donde conste el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, según el sistema penal vigente, que se iniciaron en contra de personas servidoras públicas de la entonces Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la actual Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritas al municipio de Ecatepec de Morelos, al mayor grado de desagregación posible.

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen, y se ponga a disposición de la parte* ***Recurrente****.*

*En el supuesto que la información ordenada no obre en los archivos del* ***Sujeto Obligado*** *por no haberse generado, bastará con que así lo haga del conocimiento de la parte* ***Recurrente****, de manera fundada y motivada, para tener por colmado el requerimiento de información.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.